

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original

Recurso nº 284/2024

Acuerdo, de 17 de julio de 2024, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto por UNITEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.L. contra el Acuerdo, de 6 de junio de 2024, del Consejero de Digitalización por el que se rechaza su oferta del procedimiento de licitación del contrato de “Gestión integral de la red de centros de capacitación digital (digital skills)” con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España-Financiado por la UE-NEXT GENERACIÓN EU (C19.I01.P03.S07)”. EXPEDIENTE A/SER -003843/2024,

El 28 de junio, UNITEL presenta recurso especial en materia de contratación ante el órgano de contratación contra el acuerdo de exclusión, que es remitido a este Tribunal el 3 de julio junto con el expediente de contratación y el informe a que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

La impugnación se fundamenta en la indebida exclusión del procedimiento al considerar el recurrente que ha acreditado la viabilidad de su oferta anormalmente baja.

El 1 de julio se adjudica el contrato a la UTE DISEÑO PÁGINA WEB S.L.-ALQUILER Y VENTA RÁPIDA, S.L.

Se trata de un contrato financiado por la UE (Fondos Nex Generation EU)-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado avanzado en la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación muy similar o incluso ya con la adopción de la decisión de adjudicación.

Dado el estado de tramitación del expediente, en el que se ha procedido a adjudicar el contrato el 1 de julio y que sería posible llegar a la formalización del contrato con anterioridad a la resolución del recurso, motivo por el cual este Tribunal considera que debe garantizar que no se celebre el contrato sin que se haya decidido sobre el fondo del asunto.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato. Con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación se evita que con la posible formalización del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad:

ACUERDA

Suspender de oficio la tramitación del procedimiento del contrato referido hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

LA PRESIDENTA EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL
(conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010 y 19.2 LRJSP)

Firmado digitalmente por: ARCOCHA GIMENEZ MILAGROS
Fecha: 2024 07 18 10:20